

Capítulo 9

Los Vínculos entre el Partido y la Base, la Movilización Contestataria y las “Tensiones Creativas” en Bolivia

John Brown

En el curso de los procesos liderados por la izquierda en América Latina en las últimas dos décadas, las relaciones entre los partidos de izquierda gobernantes y los movimientos constituyentes tomaron caminos complejos. En algunas ocasiones, las organizaciones populares se movilizaron en defensa del partido, tanto a nivel electoral como en las calles, mientras que en otros momentos hubo fricciones. En el caso de Bolivia, el cambio a la izquierda inicialmente siguió “un modo clásico de incorporación desde abajo a través de un partido de movilización de masas” (Silva, 2017: 93), y el gobierno se presentó como un “gobierno de movimientos sociales”. Sin embargo, surgieron tensiones entre sectores del movimiento base y el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS). Fontana (2013: 31) argumenta que “es evidente que las típicas políticas de oposición de los movimientos sociales bolivianos no han cambiado incluso con una administración más progresista”. Durante las presidencias de Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, las calificó como “tensiones creativas” naturales que actúan como motor para la construcción del socialismo. Sin embargo, otros (Veltmeyer, 2014; Webber, 2017) cuestionan el análisis de García Linera, afirmando que las demandas populares para una transformación más rápida fueron dejadas de lado.

Para comprender la evolución de las relaciones partido-movimiento y explicar tanto la convergencia como la divergencia, es necesario entender que el proceso liderado por el MAS y el apoyo de las organizaciones populares al mismo se basaban en el rechazo al neoliberalismo. Las tensiones surgieron cuando el MAS se apartó de un rumbo antineoliberal. Esto plantea varias preguntas. ¿Por qué el MAS moderó el proceso? ¿Esta moderación desencadenó tensiones entre el partido y la base? Y de ser así, ¿qué forma tomaron? y ¿cómo podemos explicar esto?

Para abordar estas preguntas, es necesario analizar las relaciones partido-base en un marco más amplio que dé cuenta de la evolución de las relaciones de poder entre el gobierno de izquierda

y el bloque de oposición pro-neoliberal. Para entender si un partido de izquierda gobierna desde la izquierda y retiene el apoyo del movimiento popular, debemos entender la naturaleza del poder de la oposición. Además, los movimientos y el partido pueden converger cuando se enfrentan a un enemigo universal, lo que permite forjar nuevos vínculos entre la base y el partido, pero es necesario considerar si dichos vínculos actúan como medios para que los movimientos den forma al proceso de reforma desde abajo o si son utilizados por los funcionarios del partido para frenar la capacidad de movilización contestataria de los movimientos. Respondiendo a las inquietudes antes mencionadas, este capítulo ofrece un marco para evaluar las relaciones partido-movimiento junto con las relaciones partido-oposición antes de pasar al análisis del caso boliviano desde el punto de vista de las organizaciones populares en la ciudad de El Alto.

Análisis Relacional entre el Estado de Izquierda, los Sectores Populares Organizados y las Élités Económicas

El análisis de por qué las fuerzas constituidas entran en confrontación con sus bases constituyentes exige un marco que explique el poder relativo de las élites económicas, la base popular organizada y el gobierno de izquierda. El enfoque estratégico-relacional de Jessop (2008) es útil en este sentido. Jessop (2008: 1) parte de la premisa de que el Estado es una relación social que refleja el cambiante equilibrio de poder entre las fuerzas sociales. También afirma que (2008: 6): “Poner a los estados en su lugar de esta manera no excluye (de hecho, presupone) procesos específicamente engendrados y mediados por el estado. Sin embargo, requiere que se relacionen tanto con su contexto social más amplio como con las elecciones estratégicas y la conducta de los actores dentro y fuera de los estados”. La selección de estrategias, proyectos y políticas por parte de los agentes estatales influirá en las oportunidades de los grupos para alcanzar sus objetivos y, al mismo tiempo, el equilibrio de fuerzas en la sociedad influirá en la gama de opciones de políticas disponibles para los agentes estatales. Si bien los políticos izquierdistas electos ejercen un papel clave en el poder

estatal, actúan conforme a ello e influyen en un equilibrio más amplio de las fuerzas sociales (los sectores populares organizados y el capital). Por lo tanto, para estudiar la relación entre el estado de izquierda, la base popular organizada y las élites económicas, “debemos considerar cómo se ejercen y se alinean (o no) los poderes estatales con los intereses de clase específicos en sociedades y coyunturas particulares, y viceversa” (Jessop, 2016: 96). Para ello, debemos identificar tanto lo que incrementa el poder del capital y de la base popular para ejercer presión sobre los agentes estatales, como lo que acrecienta la capacidad de los agentes estatales para influir en el poder de ambos grupos.

Cuando el poder estructural del capital es sólido, se reduce la gama de opciones políticas disponibles para los agentes estatales que desafían los intereses del capital. Basado en previos debates entre teóricos como Nicos Poulantzas, Ralph Miliband y Fred Block, entre otros, Culpepper (2015: 396) afirma que el poder estructural resulta del hecho de que “los poseedores del capital controlan las decisiones de inversión de las que depende la economía para poder desarrollarse.” Además, como señala Robinson (2012: 353-358), en un entorno globalizado, el impulso neoliberal hacia un “ámbito único unificado a favor del capitalismo global” ha incrementado significativamente el poder estructural de los capitalistas transnacionales, limitando así la autonomía de los agentes estatales que se enfrentan a la presión de promover un entorno favorable a los intereses de las élites económicas transnacionales. Sin embargo, los agentes estatales no están totalmente restringidos por el poder del capital y pueden seleccionar estratégicamente políticas que, en ciertas coyunturas, favorezcan los intereses de la clase popular sobre los del capital (Jessop, 1990: 248-272). En efecto, las relaciones estado-capital no pueden entenderse fuera de un análisis más amplio que tome en consideración las relaciones entre el estado y la base popular.

Un aspecto clave de la capacidad de la base popular para influir en los agentes estatales es su facultad para participar en lo que Silva (2017) denomina “intermediación informal de intereses contestatarios”-“interacciones rutinarias en las que el gobierno propone una política, las organizaciones del sector popular afectado protestan enérgicamente, se produce una negociación y el gobierno acata los acuerdos” (Silva, 2017: 96). Esta intermediación involucra “principios,

normas, procesos y rutinas que no están contemplados en la ley” (Silva, 2017: 103) pero que son entendidos tanto por la base como por el partido por igual. La misma está influenciada por la capacidad de movilización de la base popular, que a su vez depende de su propia fuerza y unidad organizativa y de su grado de autonomía frente al partido de izquierda (Anria, 2016). Mientras mayor sea la escala disruptiva, duración y frecuencia de las movilizaciones de la base popular, mayor será su capacidad para influir en la toma de decisiones de los agentes estatales.

La frecuencia en el uso de la intermediación informal de intereses contestatarios depende de la relación entre la base y el estado, que a su vez está influenciada por las relaciones entre el estado y el capital. Una agenda común o un enemigo universal opuesto a la base y al partido es más propicio para una relación de alianza entre la base y el partido y, por consiguiente, se pueden anticipar niveles más bajos de movilización contestataria. Asimismo, en las relaciones de alianza es más probable que existan vínculos extensivos e intensivos entre la base y el partido. Los vínculos extensivos son “lazos políticos sueltos basados en gran medida en un intercambio de bienes particularistas”, que incluyen los pagos clientelistas/selectivos y las compensaciones de patrocinio (Anria y Cyr, 2017: 1256, 1268). Los vínculos intensivos comprenden la integración de las organizaciones populares dentro de la estructura burocrática formal del partido (Anria y Cyr, 2017). Cuando se construyen vínculos intensivos extremos, es más probable que las organizaciones populares se involucren profundamente en el partido y se conviertan en aliados confiables.

Por el contrario, cuando el poder del capital sobre los agentes estatales es fuerte y el partido adopta políticas favorables al capital, es muy factible que exista una relación adversaria entre el partido y la base y que la intermediación contestataria sea más frecuente. Los agentes estatales, a su vez, pueden tratar de limitar el espacio para una intermediación exitosa. Mas aún, los vínculos extensivos e intensivos forjados durante las relaciones de alianza pueden socavar seriamente las capacidades independientes de la base popular. Los vínculos extensivos pueden sobornar a los líderes de los movimientos y reducir la probabilidad de movilizaciones contestatarias, incluso cuando las decisiones de los partidos afecten el bienestar de la base de los movimientos sociales, mientras que los vínculos intensivos probablemente debiliten la autonomía de los movimientos.

Además, si los miembros ordinarios de los movimientos sociales consideran que los agentes estatales privilegian el capital por encima de las demandas populares y si la cooptación imposibilita que los líderes del movimiento llamen a la movilización contestataria, es probable que ocurran tensiones dentro del movimiento. Estas tensiones pueden fracturar la unidad y la fuerza organizativa de la base, asegurando así un ámbito de gobierno más tranquilo en el que los agentes estatales de izquierda busquen evitar desafíos radicales a los intereses del capital.

Avances y Retrocesos en el Proceso de Cambio de Bolivia

El bloque de apoyo inicial del MAS fue una coalición heterogénea de actores populares con una alianza estratégica con un bloque más autónomo de organizaciones del movimiento. El MAS surgió de un movimiento de resistencia de los productores de coca y mineros reubicados en el Chapare, y los representantes y organizaciones con sede en esta provincia constituyen su núcleo central. Sin embargo, el foco de atención aquí está en los socios estratégicos, por ser estos los más frecuentes responsables de las tensiones entre la base y el gobierno. El análisis se centra en las experiencias de las organizaciones populares de El Alto que estuvieron en el centro de las protestas antineoliberales que ayudaron a llevar a Morales a la presidencia. La recopilación de datos primarios se centró en los grupos que apoyaron continuamente a Morales y al MAS y en los grupos que inicialmente apoyaban al presidente pero que luego pasaron de ser aliados a adversarios. En 2017, se realizaron treinta y cinco entrevistas, las cuales se centraron en las principales organizaciones populares locales, la Federación de Juntas Vecinales–El Alto (FEJUVE) y la Central Obrero Regional–El Alto (COR). Para aumentar la generalización de los hallazgos, los entrevistados fueron elegidos tanto de los miembros de base como de los comités ejecutivos.

2003-2005: Movilización Antineoliberal y Demandas Populares en El Alto

En octubre de 2003, los habitantes de El Alto “organizaron manifestaciones masivas después de que el presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada diera a conocer los planes para otorgar concesiones a empresas transnacionales para canalizar el gas natural desde las tierras bajas orientales hasta los puertos chilenos para exportarlo a los Estados Unidos” (Postero, 2010 : 61). Los “términos de la concesión al capital extranjero, esbozados como un obsequio, convirtieron el asunto en un símbolo de exclusión del sector popular de la sociedad de mercado” (Silva, 2009: 134-135). Había un creciente desencanto con las políticas orientadas al mercado, mientras que en todo el país se percibía un completo hastío hacia los partidos tradicionales, cuyas tomas de decisiones tecnocráticas excluían las voces del sector popular. Como señaló Luis Flores, representante central de la dirección de la FEJUVE durante el período 2003-2005, “los líderes de las organizaciones y la base se unieron en la idea de que la COR y la FEJUVE tenían que recuperar el control de sus organizaciones, las cuales habían sido instrumentalizadas por los partidos políticos de la ciudad” (entrevista, El Alto, 23 de agosto de 2017). Alfredo Cahuaya, vecino del Distrito 4 y participante activo en las protestas, dijo que “la democracia había llegado a su límite en el año 2003, cuando el pueblo, en lugar de ser incorporado o incluido en los planes de desarrollo de la ciudad y del país, fue excluido. Los líderes de la COR y de la FEJUVE simplemente obedecieron las demandas de los partidos” (entrevista, La Paz, 18 de agosto de 2017). Los partidos, por su parte, “se unieron a las demandas del capital extranjero” (Carlos Arze del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, entrevista, La Paz, 25 de agosto de 2017). Había una sensación de exclusión tanto política como socioeconómica entre los alteños, la ciudad había sido “olvidada” por sucesivos gobiernos que complacían las demandas de poderosos actores económicos nacionales y extranjeros (Espósito y Arteaga, 2006: 79, 86).

En este contexto, la COR y la FEJUVE eligieron nuevos líderes que no estaban vinculados a ningún partido y que esbozaron un conjunto de demandas exigiendo la nacionalización total y la recuperación del control sobre la extracción e industrialización del gas natural de Bolivia. Como me

informó Carlos Barrera, vicepresidente de la FEJUVE en 2003, “Nuestro objetivo final era promover un programa político revolucionario y cambios estructurales profundos en el país. El sistema neoliberal tenía que terminar” (entrevista, El Alto, 27 de junio de 2017). Las demandas de la COR y la FEJUVE, que reflejaban las preocupaciones de la base popular, también se centraban en la dotación estatal de empleos no precarios, así como de servicios básicos como alcantarillado, agua potable, conexiones de gas y alumbrado. Conocido como la "Agenda de Octubre", este conjunto de demandas se convirtió en un programa unificador que incitó nuevas oleadas de movilización masiva en las guerras del gas de la ciudad entre el 2003 y el 2005. Estas oleadas de protesta no fueron impulsadas simplemente por las demandas de un mayor control sobre los recursos nacionales y las prestaciones de servicios estatales, sino también por la necesidad de limpiar toda la estructura política de partidos corruptos y actores comprometidos con los intereses del capital. En diciembre de 2005, Evo Morales fue elegido, con el apoyo de los sectores populares organizados de El Alto, con el mandato de “restaurar la autonomía política y económica nacional, dar paso a la participación política y al poder a los líderes de izquierda y otros sectores populares hasta ese momento marginados, y proteger a los sectores populares mestizos e indígenas abrumadoramente pobres e indigentes de los embates del mercado” (Silva, 2009: 143).

2005–2010: El MAS en El Alto y las Relaciones Estratégicas

En respuesta a la Agenda de Octubre y al proceso de asamblea constituyente convocado durante el primer mandato de Morales, las élites de las tierras bajas orientales comenzaron sus luchas por la autonomía regional en un intento por evitar los cambios propuestos en los derechos de propiedad privada, la reforma agraria y la redistribución de los ingresos estatales. Para agosto de 2008, había una guerra civil virtual no declarada en las tierras bajas orientales. Se forjó una alianza estratégica entre el MAS, la COR y la FEJUVE, que se unieron en la lucha común para impulsar la reforma constitucional frente a la resistencia de las élites. Habiendo sido testigo del poder de movilización

de las organizaciones de El Alto, Morales quería asegurar el apoyo de sus liderazgos no solo electoralmente sino también en la defensa contra las tácticas desestabilizadoras de los conservadores (Anria, 2013). Por su parte, los líderes de la FEJUVE y la COR vieron en el MAS una oportunidad para acceder al Estado e impulsar el logro de la Agenda de Octubre y el desarrollo de El Alto a través del suministro de servicios básicos y de empleos no precarios por parte del Estado (Franklin Troche, encargado de prensa internacional de la COR, entrevista, El Alto, 13 de julio de 2017).

Los puestos en el gobierno o el acceso directo a la toma de decisiones se intercambiaban por lealtad (Anria, 2013), lo que implicaba movilizar la base para las elecciones, participar en protestas defensivas contra los esfuerzos de desestabilización de las élites y garantizar que no se producirían protestas a gran escala contra las políticas del MAS (exvicepresidente de la FEJUVE, entrevista, El Alto, 27 de junio de 2017). La COR mantuvo “desde entonces, muy buenas relaciones con el gobierno central. Apoyamos al gobierno en la Asamblea Constituyente; los apoyamos contra los autonomistas. El gobierno y la COR, estábamos muy unidos. Teníamos que defender el proceso” (vocero de la COR, entrevista, El Alto, 13 de julio de 2017). Como me dijo Franklin Troche: “Somos trabajadores, somos de izquierda. Teníamos que apoyar a Evo Morales y al gobierno porque es un partido de izquierda” (entrevista, El Alto, 13 de julio de 2017). La FEJUVE también compartía una afinidad ideológica con la postura antineoliberal del MAS. La “FEJUVE apoyó el proceso liderado por el MAS porque compartían los mismos principios. Esto no quiere decir que la FEJUVE fuera parte del MAS, sino que compartían una filosofía” (Daniel Gutiérrez, encargado de prensa internacional de la FEJUVE, entrevista, El Alto, 9 de agosto de 2017).

Para resumir el primer mandato de Morales mediante el marco estratégico-relacional, podemos ver que buscó cumplir con las demandas populares de una mayor inclusión política y económica, desafiando así los intereses de las élites bolivianas tradicionales. Considerando los agresivos esfuerzos de desestabilización de las élites de las tierras bajas, Morales era vulnerable a la movilización o deserción de las organizaciones populares. Asimismo, dichos esfuerzos de las élites por sacar del poder a Morales y bloquear las reformas constitucionales que impulsarían la inclusión

de los sectores populares hizo que el MAS, la COR y la FEJUVE se unieran contra un enemigo común proneoliberal. Durante este período, las organizaciones populares en El Alto y en todo el país estuvieron en el apogeo de su capacidad de movilización, por consiguiente, eran capaces tanto de defender al gobierno de las tácticas de desestabilización como de mantenerlo a la altura de sus demandas (Silva, 2017). Con los movimientos populares capacitados para paralizar el país y el gobierno y para rodear y aislar las fuerzas autonomistas en el Este, Morales convocó a un referéndum sobre la aceptación del proyecto de constitución, el cual fue aprobado en el 2009.

Durante esta lucha contra las fuerzas autonomistas, se forjaron vínculos intensivos y extensivos entre el MAS y las organizaciones populares de El Alto, mediante los cuales los líderes de la COR y de la FEJUVE recibieron financiamiento directo del gobierno central para la realización de proyectos locales como la reparación de las calles y de las instalaciones de agua y gas, a la vez que se abrieron cargos en el gobierno para los actores locales. Sin embargo, estos vínculos se convertirían en un problema luego de que se suprimieran los esfuerzos de desestabilización de las élites.

2010-2016: El Surgimiento de las Tensiones y la Fractura de las Relaciones

Antes de la reelección de Morales en 2009, “la política boliviana se caracterizaba por una fuerte polarización entre la oposición de derecha y el gobierno y sus aliados de izquierda” (Ellner, 2013: 17). Sin embargo, con la promulgación de la nueva constitución y el repliegue de los antiguos secesionistas a los canales institucionales de oposición, el MAS ya no pudo congregarse contra un enemigo común (Fontana, 2013). De hecho, después de que el impulso secesionista fuera derrotado, las tensiones entre el partido y la base aumentaron. Para explicar la razón, es necesario resumir la naturaleza de las relaciones entre el gobierno y las empresas transnacionales después de 2010.

Para cumplir las promesas de impulsar la ciudadanía social en la nueva constitución, Morales dependía de los ingresos provenientes de las industrias de recursos naturales del país. Sin

embargo, había heredado una industria extractiva con trayectorias dependientes que dotaban a las corporaciones transnacionales de altos niveles de poder estructural (Kaup, 2010). La extracción del gas natural requiere de inversiones continuas a gran escala para la exploración, pero la empresa estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el sector de hidrocarburos en general habían recibido muy poca inversión desde finales de la década de los 90. Asimismo, la industria gasífera estaba dominada por Petrobras y Repsol, los cuales tenían contratos a largo plazo que les daban acceso a las reservas de hidrocarburos legalmente garantizados por medio de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales (Kaup 2013).

En ese marco en el que Morales fue electo, bajo la promesa de eliminar los peores excesos de la exclusión económica, la economía boliviana estaba subdesarrollada y dependía de las exportaciones de materias primas, la empresa estatal de extracción carecía de fondos suficientes y estaba obsoleta, y las empresas extractivas transnacionales estaban arraigadas de forma contractual e infraestructural en la economía. y tenían la capacidad extractiva y el capital para invertir en nuevas exploraciones, Morales no podía impulsar la nacionalización total (Kaup 2010: 135). Como me indicó el exministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, César Navarro, “los modelos productivos no cambian solo por buenas intenciones o por decretos. Son el resultado material de décadas. El extractivismo caracterizó al colonialismo, al liberalismo, al capitalismo de Estado y al neoliberalismo” (entrevista electrónica, septiembre de 2017). No obstante, se incrementaron los impuestos y las regalías a las empresas transnacionales, lo que incrementó los ingresos estatales provenientes de las exportaciones de gas de US\$ 673 millones en el 2005 a más de US\$ 5 mil millones en el 2013. La YPFB extendió su rol, tanto operativo como auditor, al mismo tiempo que tuvo una mayor voz en la decisión del destino de las inversiones. Además, los contratos de servicios de emprendimientos conjuntos entre la YPFB y las empresas extractivas transnacionales le permitieron a la empresa estatal “participar en las operaciones y desarrollar sus capacidades productivas y tecnológicas” (Paz y Ramírez-Cendero 2021: 138, 144). A pesar de estos progresos, el Estado solo buscó recuperar el control de los activos previamente capitalizados, y que las empresas en control de tales activos obtuvieran un pequeño porcentaje del gas de Bolivia (Kaup

2010). Por consiguiente, la mayor parte de la cadena de valor de los hidrocarburos no fue nacionalizada. Sin embargo, el aumento de la participación del Estado en los ingresos provenientes de los hidrocarburos y los planes para dirigir estos fondos a programas sociales representaron un cambio de política significativo con respecto a los gobiernos neoliberales anteriores.

Si bien Morales calculó estratégicamente hasta dónde podía llegar dado el incrustado poder estructural del capital transnacional, las élites corporativas transnacionales también se involucraron en la toma de decisiones estratégicas. Hasta el 2009, las empresas extractivas transnacionales habían adoptado una postura agresiva hacia Morales, apoyando a las élites políticas de las tierras bajas en su búsqueda por la autonomía. No obstante, después de las elecciones presidenciales y del congreso del 2009 y las elecciones departamentales o subnacionales del 2010, el MAS dominó la esfera política y las élites corporativas transnacionales se dieron cuenta de que era inútil contar solamente con una alianza con los partidos políticos de derecha para proteger sus intereses (Wolff, 2016). En este escenario, en el que Morales dependía de las transnacionales y en el que éstas, a su vez, dependían de que él mantuviera un entorno lucrativo saludable, sus relaciones evolucionaron de la confrontación al diálogo y, posteriormente, a la cooperación (Wolff, 2016). El resultado de tal acción estratégicamente calculada y estructuralmente orientada fue una nacionalización acordada que, aún si apaciguaba al capital, llevó al MAS a confrontar a los sectores de su propia base de apoyo.

Para algunos alteños que habían tomado las calles entre el 2003 y el 2005, la nacionalización moderada representaba un incumplimiento de las promesas iniciales de Morales de adherirse a la Agenda de Octubre. Como indicó un miembro del comité ejecutivo de la FEJUVE de 2003: “El MAS proporcionó solo migas, un estadio y otras baratijas, pero eso no fue por lo que luchamos en el 2003” (entrevista, El Alto, 8 de agosto de 2017). Según algunos alteños que tomaban el té en un puesto en La Ceja, El Alto: “Aquí nada cambió. Evo nos olvidó una vez que asumió la presidencia. Aún seguimos sin trabajo, sin seguridad. Todavía somos pobres”. Como lo expresó otro miembro del comité ejecutivo de la FEJUVE durante las protestas del 2003 (entrevista, El Alto, 24 de agosto de 2017),

La Agenda de Octubre exigía la nacionalización total, no una negociación sobre el precio que pagan las empresas transnacionales. El gobierno no ha exigido la salida de las transnacionales. Esto no es una nacionalización. De hecho, todas las empresas transnacionales y los negocios han recibido más ayuda aún por parte del gobierno. Las élites, ahora más que nunca, se han apoderado del gobierno.

Este análisis fue repetido por Carlos Rojas, uno de los actores principales de la ola de luchas antineoliberales de El Alto y activista de larga data: “No se ha expropiado ni un lápiz de las multinacionales y, como resultado, el programa revolucionario del 2003 ha sido destruido” (entrevista, El Alto, 28 de junio de 2017). Las relaciones entre el Estado y las empresas transnacionales, las percepciones de que el gobierno no había proporcionado suficientes empleos y servicios públicos básicos, y la creencia de que Morales había incumplido con la promesa de garantizar espacios para la participación popular en la toma de decisiones llevaron a muchos alteños con los que hablé a describir a Morales como “no mejor que [los expresidentes] Mesa, Goni y todos los demás neoliberales” (conversación con chofer de minibús, El Alto, 4 de agosto de 2017). De hecho, haciendo eco del análisis de Zibechi (2010), un factor clave que condujo al descontento con Morales fue la sensación de que la toma de decisiones seguiría siendo jerárquica y excluyente.

Si bien hubo tensiones entre el MAS y algunos sectores de la base sobre el alcance de las reformas y por cómo se tomaron las decisiones, es importante destacar que también hubo convergencia entre el partido y los líderes de las organizaciones populares que apoyaban el proyecto, aún si criticaban la marcha de las reformas. Franklin Troche de la COR captó este sentimiento: “El gobierno tiene que adherirse a la Agenda de Octubre. Este es el mandato de la ciudad de El Alto. Algunas organizaciones de izquierda han disminuido su apoyo a Don Evo Morales porque aún no se ha completado la industrialización de nuestros recursos naturales” (entrevista, El Alto, 13 de julio de 2017). Continuó diciendo que, a pesar de la divergencia entre las expectativas populares y las realidades presentadas por el gobierno del MAS, “debemos seguir del lado del gobierno. Los trabajadores de El Alto no pueden alinearse con partidos de derecha.

Podemos tener distintas líneas de pensamiento con respecto al gobierno, pero nuestra institución debe ser siempre de izquierda. . . y el MAS es de izquierda”.

Aún si algunos líderes de la organización aceptaron que las restricciones estructurales del gobierno del MAS limitaran su capacidad para intervenir en una nacionalización más rápida, en la industrialización y en la subsiguiente creación de empleo no precario, así como en el aumento del gasto social, todavía estaba el hecho de que para muchos miembros de la base de las organizaciones populares en El Alto el proceso avanzaba demasiado lento. Sin embargo, los principales vehículos de intermediación de los intereses contestatarios, la COR y la FEJUVE en general, no convocaron manifestaciones masivas contra la política del gobierno (Carlos Arze, entrevista, La Paz, 25 de agosto de 2017). Arteaga (2015) afirma que a partir del 2010, tras finalizar el impasse entre el gobierno y las élites orientales, el MAS incrementó sus esfuerzos para dar cabida a las organizaciones populares de El Alto. Según un miembro de la dirección de la FEJUVE durante la guerra del gas, se les ofrecieron cargos políticos a los líderes de la COR y de la FEJUVE dentro del MAS, utilizando así a las organizaciones populares como “trampolines para ser diputados, senadores, concejales y para postularse a alcalde” (entrevista , El Alto, 9 de agosto de 2017). Sin embargo, Daniel Gutiérrez (entrevista, El Alto, 9 de agosto de 2017) de la FEJUVE me dijo que la organización

apoya los programas sociales del gobierno, y participamos en las convocatorias públicas que organiza el MAS, y esto ha generado confusión en cuanto a nuestra relación. No somos simplemente una entidad aliada. La FEJUVE siempre estará del lado de la defensa de nuestros barrios. Es por eso que la FEJUVE ha tenido afinidad con el MAS, pero no somos parte del partido político.

Si bien es comprensible que una organización popular de ideología socialista apoyara al MAS, la naturaleza de los vínculos entre algunos líderes de la organización y el partido sí generó fricciones. En efecto, un político del MAS del concejo municipal de El Alto me admitió que el MAS “cometió muchos errores al cooptar y controlar la COR” (entrevista anónima, El Alto, 13 de

julio de 2017). El “problema de todo esto es que la COR ha perdido su capacidad de responsabilizar al gobierno” (Carlos Arze, entrevista, La Paz, 25 de agosto de 2017). A pesar de tales críticas, el vocero de la COR dijo que la organización sí participó en la intermediación de intereses contestatarios pero solo cuando era prudente hacerlo: “¿Qué pasaría si presionamos a Evo hasta hacerlo caer? la derecha volvería, los gobiernos militares volverían. Así que no podemos presionar demasiado rápido” (entrevista, El Alto, 13 de julio de 2017).

Estos puntos de vista matizados de los actores locales que rechazan el neoliberalismo resaltan el difícil equilibrio que enfrentan los líderes de organizaciones populares cuando un partido de izquierda es elegido para el cargo. La incorporación de los líderes de las organizaciones populares en las estructuras estatales, a veces como candidatos del MAS, y la dotación de los tan necesitados fondos por parte del gobierno del MAS a las organizaciones locales representan una profundización significativa de la calidad de la participación democrática para los sectores que han sido excluidos por tanto tiempo. Sin embargo, estos vínculos intensivos y extensivos son de doble filo ya que también pueden desalentar la disposición de los líderes de las organizaciones populares para participar en la movilización contestataria. Por ejemplo, un miembro del comité ejecutivo de la COR me dijo (entrevista anónima, El Alto, 7 de agosto de 2017) que Eliseo Suño, secretario ejecutivo de la COR, estaba dañando profundamente a la organización porque “en un minuto apoyaba abiertamente a Evo Morales y al siguiente ya no. La COR ha sido mancillada y ensuciada, y debe ser purgada. Debimos haber mantenido nuestra autonomía. Quizás después de apoyar al gobierno durante la asamblea constituyente, nos involucramos demasiado como para ser críticos”.

Los vínculos entre el MAS y el ejecutivo de la FEJUVE también plantearon problemas para la intermediación contestataria. Por ejemplo, en el 2010, en el XVI Congreso de la FEJUVE, Fanny Nina fue elegida presidenta. La nueva dirección de la FEJUVE era extremadamente crítica del fracaso del MAS para ceñirse rigurosamente a la Agenda de Octubre, afirmando que “el MAS simplemente mantiene el mismo sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal” (FEJUVE–El Alto, 2010: 11). Asimismo, dijo que, si bien el MAS había sido electo con el apoyo

de las poblaciones indígenas y las clases populares, estos grupos eran cada vez más excluidos de la toma de decisiones políticas y, de hecho, estaban siendo tomados por el MAS para “legitimarse a sí mismos como gobierno de los movimientos sociales”. Por lo tanto, era vital que “el poder ejecutivo de la FEJUVE se independizara políticamente de los partidos tanto de izquierda como de derecha a nivel nacional, departamental y municipal”. La preocupación de algunos sectores del ejecutivo de la FEJUVE y de la base era que el ofrecimiento de acceder a cargos políticos dentro del MAS (vínculos intensivos) y las promesas de financiamiento directo a los líderes leales (vínculos extensivos) estaban menoscabando la capacidad de la organización para criticar las relaciones del gobierno central con las empresas transnacionales (Fanny Nina, entrevista, El Alto, 25 de julio de 2017).

Elegida en el 2010 gracias a sus contundentes llamados para que la dirección de la FEJUVE fuera más abierta y receptiva con su base, Nina encontró rápidamente resistencia por parte de algunos sectores del ejecutivo de la FEJUVE. Fue destituida de su cargo por un grupo del comité ejecutivo que la acusó de trabajar por intereses personales y en contra de la FEJUVE (Fanny Nina, entrevista, El Alto, 25 de julio de 2017), y Rúben Paz asumió la presidencia (Paz luego se convertiría en secretario general de la Gobernación de La Paz cuando Zacarías Maquera del MAS fue alcalde de El Alto). Según Javier Tarqui, concejal de El Alto por el partido Sol. Bo, el nuevo ejecutivo de la FEJUVE estaba “estrechamente alineado con el MAS” y “la organización no ofreció ningún desafío coherente al gobierno central” (entrevista, El Alto, julio de 27, 2017). Por su parte, Sandro Ramírez, ejecutivo de la FEJUVE, rechazó tales apreciaciones, repitiendo una frase que, en repetidas ocasiones, escuché durante las entrevistas: “que estemos con el gobierno no significa que seamos del MAS” (entrevista, El Alto, 26 de julio de 2017). Ramírez señaló que la FEJUVE apoyaba al MAS porque el gobierno respondía a las necesidades de la ciudad (El Alto). Sin embargo, el problema era que, si bien los estrechos vínculos entre el MAS y algunos líderes de organizaciones locales habían ciertamente traído beneficios a la ciudad, el alcance de estos beneficios y la rapidez con la que ocurrían estos cambios enfrentaban el escrutinio popular. La decepción con la profundidad del cambio con respecto a la nacionalización de los hidrocarburos y

la aparente falta de financiamiento para el desarrollo de El Alto generó dudas sobre la relación entre el MAS y los líderes de las organizaciones populares.

Las organizaciones populares en El Alto que coordinaron la movilización antineoliberal antes de la elección de Morales habían despertado expectativas populares sobre una transformación radical antineoliberal. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas cambió en el segundo mandato de Morales. Morales optó por moderar el proceso de reforma puesto que ya no tenía que hacer frente a las apremiantes amenazas internas de los autonomistas, lo que disminuía la dependencia del gobierno a las movilizaciones defensivas de la base popular, y enfrentaba las restricciones estructurales impuestas por la dependencia del gobierno de las empresas exportadoras transnacionales. Esta estrategia irritó a los sectores de la base popular, pero el auge de los precios de la gasolina propició un mayor gasto social, por lo que Morales mantuvo el firme respaldo de las principales organizaciones populares que desempeñaron un papel fundamental en el establecimiento del MAS y cuyas voces se incorporaron al proceso de formulación de políticas. Además, al hacer uso de los vínculos forjados durante su primer mandato, pudo limitar la intermediación de intereses contestatarios de las organizaciones populares estratégicamente aliadas, asegurando así un ámbito de gobierno relativamente tranquilo y un continuo éxito electoral. No obstante, el problema con esta estrategia fue que al limitar el alcance de las organizaciones estratégicamente aliadas para participar en la movilización contestataria dio pie a que aumentara el descontento con el proceso de reforma dentro de las propias organizaciones.

2016-2018: Grietas en Organizaciones de Base y en las Paralelas

En un escenario en el que sectores de los ejecutivos de la FEJUVE y de la COR habían establecido vínculos estrechos con el MAS, pero en el que el descontento popular aumentaba con respecto a la naturaleza tanto de las relaciones gobierno-capital como de las relaciones verticales entre gobierno y base, surgieron rupturas dentro de las organizaciones populares. Al mismo tiempo que surgían

estas divisiones, Soledad Chapetón, del partido de derecha Unidad Nacional y vinculada a intereses comerciales, fue elegida alcaldesa. La elección de Chapetón fue el resultado de la frustración pública en torno al desempeño del alcalde del MAS (y ex secretario ejecutivo de la COR) Edgar Patana, “quien no logró dar empleo. . . o proyectos a la base” (Daniel Ramos, coordinador regional del MAS en El Alto, entrevista, El Alto, 10 de agosto de 2017) y enfrentaba denuncias por corrupción. Con grietas surgiendo en la COR y la FEJUVE y con el MAS y la Unidad Nacional ahora buscando forjar vínculos intensivos y extensivos, las organizaciones populares se dividieron en dos entes rivales.

Utilizando los canales existentes, el MAS continuó ofreciendo financiamiento y apoyo a un grupo de líderes “leales”, mientras utilizaba su influencia mediática para marginar las voces críticas con el proceso de nacionalización moderado, el estrechamiento de las relaciones entre el gobierno y las empresas transnacionales, y la falta de diversificación económica (Arteaga, 2015). Mientras tanto, el bloque que buscaba recuperar la autonomía del MAS por su supuesto incumplimiento de la agenda antineoliberal, finalmente se vinculó al partido de derecha Unidad Nacional, que, una vez en control de los fondos municipales, ofreció financiamiento a los poderes “contestatarios” de la COR y la FEJUVE.

En 2016, las divisiones dentro de la dirección de la FEJUVE resultaron en un escenario en el que se organizaron simultáneamente dos congresos para seleccionar una nueva dirección, uno reconocido por el MAS con sede en la localización original de la FEJUVE en la Avenida 6 de Marzo y un segundo congreso con sede en Villa Dolores y reconocido por la alcaldesa de derecha, Chapetón. Asimismo, el resultado de los vínculos del MAS con los líderes “fieles” de la COR propició una división en la organización que fue alentada por Unidad Nacional, que apoyó y financió el desarrollo de una COR paralela (Daniel Gutiérrez, entrevista, El Alto, 9 de agosto de 2017).

Carlos Rojas, ex miembro de la FEJUVE del 6 de Marzo, pasó a formar parte de la dirección de la FEJUVE de Villa Dolores y calificó a la FEJUVE del 6 de Marzo de “títere” del

MAS. Para Rojas, la verdadera FEJUVE, encabezada por Benigno Siñani, estaba en Villa Dolores y era “contestadora, combativa y orgánica” (entrevista, El Alto, 28 de junio de 2017). Siñani dijo: “Dejamos la política en casa y entramos a la FEJUVE para trabajar sin afiliaciones políticas. Desafortunadamente, el gobierno central nos ha etiquetado de derecha. Cualquier tipo de organización que no apoye al gobierno, es siempre tildado de derecha” (entrevista, El Alto, 26 de junio de 2017). Por su lado, Daniel Gutiérrez de la FEJUVE de 6 de Marzo cuestionó el carácter contestatario de la FEJUVE de Villa Dolores, señalando que miembros del equipo de Chapetón estuvieron presentes en el primer congreso para constituir el nuevo comité ejecutivo de la FEJUVE de Villa Dolores, felicitando a los nuevos líderes y bebiendo cerveza con ellos (entrevista, El Alto, 9 de agosto de 2017): “Nosotros le llamamos la FEJUVE amarilla por ser el color de Unidad Nacional. . . una FEJUVE creada por Soledad Chapetón.”

Hubo reclamos y recriminaciones por parte de los dirigentes de las dos FEJUVE. Cuando hablé con un político de la Unidad Nacional en el ayuntamiento (entrevista, El Alto, 20 de julio de 2017) sobre las acusaciones de que la FEJUVE de Villa Dolores era una “FEJUVE amarilla”, me dijo:

Es cierto que Soledad Chapetón me pidió personalmente que asumiera el cargo de concejal de la Unidad Nacional. Si bien tienes razón al preguntar sobre la autonomía y mis vínculos con la dirección de la FEJUVE en Villa Dolores y la Unidad Nacional, debes comprender que los partidos políticos van y vienen, por lo tanto, pueden usarse para cumplir con las metas y demandas de la base.

Por su parte, el presidente de la FEJUVE de 6 de Marzo, Sandro Ramírez (entrevista, El Alto, 26 de julio de 2017) me dijo:

Apoyamos al gobierno [MAS] porque le ha otorgado beneficios a El Alto. Oiga, si la alcaldesa [Chapetón] me invitara mañana a hacer algo que beneficie a la ciudad y, a cambio de eso, tuviera que trabajar con ella, lo haría, porque es para el beneficio de la base vecinal que debemos trabajar.

Aunque tales sentimientos pueden ser una realidad política en la ciudad, la formación de vínculos extensivos e intensivos con los partidos (ya sean de izquierda o de derecha) hizo que las organizaciones populares no actuaran como un embudo para la movilización contestataria como sucedió en el período comprendido entre el 2003 y el 2005. Según Carlos Arze, las organizaciones “deben caminar sobre la cuerda floja, respondiendo a las necesidades populares y evitando la confrontación abierta con sus partidos benefactores” (entrevista, La Paz, 25 de agosto de 2017). Un activista del movimiento social señaló: “El problema con las divisiones y cooptaciones en la FEJUVE y la COR es que hoy en día en El Alto no existe una fuerza popular. ¿Qué pueden hacer las organizaciones cuando están al servicio de los partidos? ¡Nada! ¿Qué van a exigir? ¡Nada!” (Miembro del comité ejecutivo de la FEJUVE del 2003, entrevista, El Alto, 24 de agosto de 2017). Como resumió Carlos Barrera (exvicepresidente de la FEJUVE, entrevista, El Alto, 27 de junio de 2017), la pérdida de autonomía y las divisiones dentro de la FEJUVE y de la COR hacen que “las organizaciones de El Alto sean los peones de los partidos políticos. . . cooptados e inútiles, incapaces de defender nuestra agenda radical del 2003”.

2019-2023: Convergencia contra un Enemigo Común pero Divergencia con el MAS

En el 2019, Morales ganó las elecciones con el apoyo de muchas organizaciones populares. Anteriormente, había perdido el referéndum del 2016 en el que buscaba un cambio en la constitución que le permitiera postularse para la reelección. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que la constitución permitía la reelección sin límites de mandato, una medida que unificó a la dividida oposición política y que deslegitimó a Morales a los ojos de algunos antiguos y críticos aliados estratégicos. Los resultados de las elecciones del 2019 fueron inmediatamente cuestionados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya “profunda preocupación” por un “cambio de tendencia” en los patrones de votación creó la impresión de que se había producido un fraude. Un informe publicado posteriormente por investigadores del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por

sus siglas en inglés) demostraría que el análisis de la OEA tenía fallas muy graves, desacreditándola y a su Secretario General, Luis Almagro (Williams y Curiel, 2019).

Con el anuncio de los resultados a favor de Morales por la Corte Nacional Electoral, hoy Órgano Electoral Plurinacional (OEP), y con la OEA poniendo en duda su legitimidad, estallaron protestas a gran escala en las zonas urbanas. Si bien, al principio, los manifestantes eran votantes de clase media enojados por el supuesto fraude, posteriormente se les unieron antiguas organizaciones populares aliadas estratégicamente que resentían el incumplimiento de los resultados del referéndum del 2016. No obstante, las protestas fueron finalmente cooptadas por elementos de la extrema derecha representados por Luis Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Camacho unió los sectores del bloque de oposición que habían permanecido relativamente en silencio luego del 2008 debido al poder político y al apoyo popular de Morales. Camacho y los personajes racistas aliados incitaron protestas violentas en todo el país y le pidieron a la policía que “se pusiera del lado de la gente”. Con los motines policiales en Cochabamba, Santa Cruz y Sucre y con la policía mezclándose con los manifestantes en La Paz, el general Williams Kaliman “sugirió” que Morales se hiciera a un lado, y así lo hizo. Aunque no hay ninguna duda de que Morales fue derrocado, los problemas de interferencia vertical en las organizaciones populares y el paralelismo le asestaron un doble golpe. Por un lado, la base que antes había sido poderosa y unificada se fracturó y se mermó su capacidad de movilización masiva de defensa. Por otro lado, precisamente en respuesta a los esfuerzos por frenar la autonomía de las organizaciones populares, algunas organizaciones populares se movilizaron ofensivamente contra Morales.

Luego de la destitución de Morales, Jeanine Añez fue declarada presidenta interina. Añez, del partido Unidad Democrática encabezado por el ultraconservador Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, en seguida instaló un nuevo gabinete estrechamente vinculado con los sectores de derecha de Bolivia. El gobierno de Añez persiguió a los líderes del MAS, detuvo arbitrariamente a los críticos del gobierno golpista, cerró los medios de comunicación críticos de su gestión, tildó de “animales” a los miembros del MAS y desplegó a las fuerzas armadas para reprimir las manifestaciones antigolpistas en Sacaba y Senkata en El Alto, matando al menos 23 personas e

hiriendo a cientos (Achtenberg, 2020; Clínica Internacional de Derechos Humanos y Red Universitaria de Derechos Humanos, 2020).

El resurgimiento de la derecha racista proporcionó un enemigo común que fue testigo de una reconvergencia entre los sectores divididos de las organizaciones populares de El Alto. Durante el período comprendido entre el 2018 y 2020, la FEJUVE se había fracturado en tres bloques: el bloque “contestatorio” alineado con el partido de derecha Unidad Nacional que había perdido relevancia, y dos bloques que se disputaban el control de la FEJUVE de 6 de Marzo. Un sector estaba encabezado por Fernando Condori quien buscaba recuperar la autonomía organizativa del MAS, y el otro por Basilio Villasante el cual mantuvo vínculos estrechos con el MAS. Estas luchas fueron desestimadas temporalmente cuando los líderes de ambas facciones convocaron manifestaciones masivas exigiendo la realización inmediata de elecciones presidenciales. Las elecciones finalmente se llevaron a cabo en octubre de 2020, con la boleta electoral del MAS de Luis Arce y David Choquehuanca ganando más del 55 por ciento de los votos.

En El Alto, Morales había perdido algo de legitimidad debido a su decisión de postularse para la reelección del 2019, al tiempo que el supuesto incumplimiento de la Agenda de Octubre y la formación de vínculos intensivos y extensivos extremos de algunos líderes de las organizaciones populares habían generado tensiones entre el gobierno y sectores de la base popular. La convergencia entre el MAS y las organizaciones populares de El Alto se basó desde un principio en la resistencia al neoliberalismo, y las divergencias entre el partido y la base surgieron cuando se consideró que el partido se estaba alejando de su camino antineoliberal. Sin embargo, a pesar de las tensiones y de que la respuesta del MAS había dañado la legitimidad del partido y su liderazgo a los ojos de algunos antiguos simpatizantes, el MAS seguía siendo el único partido nacional viable capaz de actuar como un bastión contra los intentos de recuperación del poder estatal por parte de la derecha neoliberal.

Frente a un enemigo común universal, ambos sectores de la FEJUVE de 6 de Marzo respaldaron la boleta del MAS en las elecciones de octubre de 2020. Es más, los votantes de El Alto aumentaron contundentemente su apoyo electoral a los candidatos del MAS en comparación con las

elecciones de 2019, en las que grandes sectores del electorado habían rechazado a Morales. Esta unificación entre los ciudadanos y las organizaciones de El Alto para enfrentar a un enemigo común es crucial para poder entender la ciudad y su influencia en la política nacional. Como me indicó Franklin Troche de la COR (entrevista, El Alto, 13 de julio de 2017),

Si bien podemos tener nuestras propias tensiones en El Alto, cuando nos enfrentamos al peligro, nos ayudamos los unos a los otros y la gente se une. Esto ha pasado muchas veces. Cuando los autonomistas estaban dividiendo nuestro país (en 2008), aquí en la ciudad también estábamos divididos. Sin embargo, ante el peligro, olvidamos nuestras divisiones y salimos juntos. Sabemos quiénes son los enemigos, son aquellos que tienen otra tendencia política.

Sin embargo, la unificación para enfrentar a un enemigo común no significa que las tensiones entre las organizaciones populares y el MAS desaparezcan una vez superado el momento crítico de confrontación con la derecha neoliberal.

Tras la elección de Arce, los dos bloques de la FEJUVE de 6 de Marzo llamaron a la unificación de la organización. Condori declaró: “Yo no soy parte del MAS, soy parte del proceso de cambio y, por esta razón, hemos decidido, junto con Villasante, unificar esta emblemática institución”. Por su parte, Villasante, haciendo eco de previas declaraciones de líderes de la FEJUVE alineados con el MAS, destacó que el único partido dispuesto a trabajar con la FEJUVE para el desarrollo de El Alto era el MAS y que las dos organizaciones trabajarían juntas. No obstante, este logro de unidad resultó ser de corta duración.

Resurgió el viejo tema de los vínculos y la autonomía entre la FEJUVE y el MAS, con Condori acusando a Villasante de utilizar a la organización para ganar posiciones políticas en el partido (ElAltoDigital, 2020; ExitoNoticias, 2020). Durante las elecciones a la alcaldía en marzo de 2021, Eva Copa, exsenadora del MAS por El Alto, con el respaldo del sector de la FEJUVE liderado por Condori, se separó de su partido para postularse a la alcaldía de El Alto con la agrupación Jallalla La Paz. Afirmó que actuaba en respuesta a las demandas de las bases de las organizaciones populares locales para recuperar la autonomía organizativa del MAS. Morales atacó

verbalmente a Copa y predijo que el candidato del MAS, Zacarías Maquera, ganaría fácilmente las elecciones, pero Copa triunfó con el 68,7 por ciento de los votos.

Durante el período 2022-2023 surgieron nuevas tensiones dentro de la estructura directiva del MAS. El gobierno de Arce pospuso un censo nacional debido a la pandemia de COVID-19, lo que desencadenó protestas masivas en Santa Cruz, encabezadas por Luis Fernando Camacho. Las élites de Santa Cruz argumentaron que había habido un crecimiento demográfico significativo en la región y que, al posponer el censo, Arce estaba bloqueando el acceso de la región a una mayor proporción de escaños en el Congreso y el acceso al financiamiento proveniente del gobierno central. Con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), una organización paraestatal fascista de Santa Cruz, imponiendo una huelga que bloqueó la ciudad, Arce finalmente anunció que el censo se realizaría en 2024 y que sus resultados se implementarían antes de las elecciones de 2025, como exigía Camacho. Los legisladores del MAS leales a Morales votaron en contra de la propuesta, mientras que aquellos que apoyaban a Arce y al gobierno la aprobaron.

Morales acusó a Arce de pactar con la derecha. En respuesta, el 28 de diciembre de 2022, las autoridades bolivianas detuvieron a Camacho por no comparecer a declarar en el caso “Golpe I” en el que se acusó a Camacho de terrorismo tras su participación en las protestas de 2019 y el posterior golpe de estado (Solón, 2023). Con Camacho en prisión al igual que Añez, quien había sido sentenciada a 10 años de prisión por su papel en el golpe, Arce trató de reforzar su imagen de líder capaz de enfrentarse a las fuerzas de derecha del país. Más allá de la división entre el MAS y la oposición, las disensiones dentro del MAS se estaban volviendo más evidentes a medida que los partidarios de Arce y los de Morales trataban de aventajar a sus oponentes facciosos antes de las elecciones programadas para 2025 (Webber, 2023). Los Evistas habían estado criticando a los Arcistas porque sentían que habían sido excluidos del poder en el gobierno de Arce que no incluyó a ninguna de las antiguas figuras clave vinculadas a Morales (Stefanoni, 2023). Las críticas de Morales se hicieron más públicas cuando declaró que sectores del gobierno de Arce intentaban impedir su regreso a la política (Stefanoni, 2023), al mismo tiempo, Morales y sus aliados acusaron al gobierno de Arce de encubrir el narcotráfico y la corrupción (Solón, 2023).

La persistencia de las tensiones creativas entre el partido y la base: Las Lecciones de Bolivia

A lo largo del período de liderazgo de Morales, así como ha ocurrido en otros países de la Marea Rosa, surgieron tensiones entre la izquierda gobernante y sectores de su base constituyente. Para ayudar a contextualizar las causas y consecuencias de tales tensiones, es conveniente un enfoque estratégico-relacional (Jessop, 2008) que explique el equilibrio de poder entre el Estado izquierdista, la base popular organizada y la élite económica. En efecto, el caso boliviano hace hincapié en los riesgos que enfrentan las organizaciones y los movimientos populares al tratar con Estados izquierdistas en un entorno donde “las restricciones económicas de dependencia estructural puedan impedir las transformaciones fundamentales a corto y mediano plazo” (Kohl y Farthing, 2012: 234).

Si bien el MAS y las organizaciones populares de El Alto se unieron para enfrentar a un enemigo común durante el primer mandato de Morales, con el tiempo los vínculos forjados entre el partido y las direcciones de la organización se convirtieron en un obstáculo para la movilización contestataria. Para mantener su legitimidad y atenerse a la Constitución de 2009 que buscaba mejorar la calidad de la ciudadanía social de los sectores excluidos, Morales requería un rápido aumento de las finanzas estatales. Dentro del contexto de una economía subdesarrollada, incrementó los ingresos estatales provenientes de la exportación de hidrocarburos. Sin embargo, Veltmeyer (2014) argumenta que la aventajada posición negociadora de los agentes del capital global terminó limitando la capacidad del gobierno del MAS para responder a las demandas populares de una reestructuración fundamental del sector de hidrocarburos. Para comprender este escenario es necesario concebir al Estado como una relación social que refleja el cambiante equilibrio de poder entre el capital y la sociedad. Aunque Morales estaba ideológicamente comprometido con un modelo anticapitalista, sus acciones luego del 2009 parecieron, en muchos sentidos, haber favorecido a las élites económicas nacionales y transnacionales, evidenciando así el poder de los grupos de los que dependía su estrategia de desarrollo. Estas selectividades estratégicas fomentaron tensiones con sectores de una base popular que había exigido (quizás de manera poco realista dado el poder estructural del capital) la nacionalización total y la inclusión directa en el desarrollo de la política nacional.

García Linera (2011: 24) argumenta que las fricciones entre base y partido deben entenderse como “tensiones creativas” dentro del “bloque nacional-popular”, “tensiones entre los mismos sectores que están liderando el proceso de cambio”. Tales “tensiones creativas” pueden surgir entre el monopolio centralizado del poder por parte del Estado y la naturaleza descentralizada de la toma de decisiones por parte de los movimientos sociales (Fuentes, 2014). Estas tensiones inevitables, según García Linera, “tienen el potencial de ayudar a impulsar el curso de la revolución misma” si se resuelven a través de la lucha y el conflicto constantes (Fuentes, 2014). Como dice Fuentes (2014: 118), “Aquí radica la verdadera importancia de la lucha desde abajo, la cual saca a la luz dichas tensiones y permite crear la mejor correlación de fuerzas posible para hacer avanzar el proceso de cambio”. Sin embargo, el caso de las organizaciones populares de El Alto plantea puntos claves con respecto a las implicaciones del concepto de García Linera de que las tensiones desde abajo pueden usarse para impulsar el proceso.

A medida que las relaciones entre el MAS y las transnacionales se estrecharon y los límites de la nacionalización moderada se hicieron más evidentes para los sectores de base, los vínculos intensivos y extensivos forjados entre el MAS y las direcciones de la COR y la FEJUVE durante el primer mandato de Morales se convirtieron en un obstáculo para la intermediación de intereses contestatarios. A pesar de la crítica popular sobre el alcance de las reformas, las direcciones de la COR y la FEJUVE aliadas estratégicamente, en términos generales, no convocaron a la movilización masiva para desafiar al gobierno. El caso de El Alto demuestra que los espacios de participación en Bolivia estaban abiertos, pero principalmente para aquellos que no cuestionaban las relaciones del MAS con las transnacionales. El descontento popular se acumuló hasta el punto en que, una vez que se dividieron las unidas y poderosas organizaciones, se abrieron oportunidades que fueron aprovechadas por los partidos de derecha. Si bien los líderes del movimiento en El Alto que aceptaron financiamiento del partido de derecha Unidad Nacional afirmaron que simplemente estaban usando al partido para obtener los fondos que el MAS les negó, estaban de hecho contribuyendo a la legitimación de ese partido, sumando más confusión a las bases, y fomentando las divisiones en las antes unificadas organizaciones populares. La fractura de la unidad

organizativa debilitó el mismo poder popular sobre el que se sustentaron las victorias electorales de Morales y, como señala García Linera, sobre el que dependía el futuro del proceso.

Aún si el resurgimiento de la extrema derecha en 2019-2020 condujo a una reconvergencia entre las divididas organizaciones populares y el MAS para enfrentar a un enemigo en común, una vez superado el momento crítico de confrontación, los temas de autonomía organizacional y de profundización del proyecto antineoliberal bajo el MAS salieron a relucir una vez más. En efecto, mientras el MAS surgía como un vehículo político para las demandas de los movimientos sociales de dejar atrás el neoliberalismo y seguir siendo el partido dominante a nivel nacional, las tensiones entre la base y el MAS abrieron espacio para nuevos partidos representantes de las demandas populares a nivel local y regional. De cara al futuro, la dirección del proceso de cambio boliviano dependerá de cómo la dirección del MAS responda a las críticas desde abajo y desde su izquierda, tanto en el ámbito electoral como en las calles. La incapacidad para reabrir espacios para el debate interno crítico puede significar una mayor fractura del bloque popular, lo que reduciría las posibilidades de desafiar a las fuerzas opositoras pro-neoliberales.

Las tensiones en el caso boliviano ponen de manifiesto los problemas relativos a las relaciones entre el partido de izquierda y el movimiento en general. Las tácticas de desestabilización extrademocráticas de las fuerzas conservadoras y las presiones impuestas por el capital transnacional para frenar los esfuerzos por aumentar la calidad de la ciudadanía social tienden a fomentar una centralización del poder en el ejecutivo (Brown, 2022; Brown, 2018; Cannon y Brown, 2017). Este punto concuerda con las inquietudes de Zibechi (2010; 2012) y Holloway (2002) de que el Estado no sea el foco de las luchas emancipatorias porque por su propia naturaleza genera relaciones verticales de poder. Estos escritores tienden a rechazar a los partidos y proponen “cambiar al mundo sin tomar el poder” (Holloway, 2002). En cambio, Katz (2012: 48) argumenta que tanto los movimientos como los partidos son esenciales: “Ningún proyecto emancipador puede desarrollarse exclusivamente en el ámbito social, ni puede prescindir de las plataformas específicas —los vínculos entre demandas y estrategias de poder— que proporcionan

las agrupaciones de partido." Por consiguiente, aboga para que el Estado sea el objetivo de todas las demandas sociales, ya que su transformación es la condición de toda transición anticapitalista.

Si bien Katz tiene razón, las inquietudes de Holloway y Zibechi con respecto a las relaciones verticales de poder entre el partido y la base no pueden ignorarse. Está claro que cuando el poder del capital sobre los agentes estatales de izquierda es más fuerte, mayores son los riesgos de que surjan tensiones entre el partido de izquierda y su base constituyente. Por lo tanto, es esencial que los movimientos populares sean fuertes por derecho propio, ya que solo los movimientos fuertes garantizarán que un Estado de izquierda se mueva en dirección de izquierda (ver Ciccariello-Maher, 2013; Poulantzas, 1978). Un público movilizado requiere que las organizaciones populares permanezcan internamente democráticas. En el contexto boliviano, aún si Morales abría canales formales de participación para las voces populares durante los enfrentamientos con un enemigo común, con el tiempo estos vínculos entre el partido y la base se osificaron, lo que provocó bloqueos en el flujo de las demandas desde abajo. Como me dijo Jaime Solares, exlíder de la Central Obrera Boliviana (COB) y figura clave en las protestas antineoliberales de 2003-2005: "Permitimos que Morales se apoderara de nuestros vehículos populares. Los líderes de nuestra organización se distanciaron de su base. Esto fue un error" (entrevista, La Paz, 12 de junio de 2017). Como demuestra el caso de El Alto, cuando las fuerzas del capital presionan a un partido de izquierda para que modere sus programas, sin dar salida al descontento popular con respecto a la dirección del proceso, aumentan las tensiones organizativas internas y pueden surgir organizaciones paralelas controladas por la derecha. Este proceso reduce el poder de movilización al quebrantar la unidad y la capacidad organizativa de la base. Aunque esto también ocurrió a nivel nacional, Morales escasamente abandonó sus compromisos antineoliberales, lo que explica el por qué los activistas de los movimientos sociales que criticaban a su gobierno respaldaron el regreso al poder de su partido en el período 2019-2020. Aún si los movimientos deben caminar sobre la cuerda floja para desafiar al partido de izquierda desde la izquierda sin fortalecer al enemigo común de la derecha y si bien la "unidad, unidad, unidad" es necesaria al momento de las elecciones nacionales,

el uso de vínculos excesivos entre base y partido para frenar la movilización contestataria puede actuar, en última instancia, como el mayor apoyo a las fuerzas del capital.

Nota

1. Este capítulo es una versión revisada de un artículo que apareció en *Latin American Perspectives* 47 (5): 40–57 (2020).

Referencias

Achtenberg, Emily

2020 “MAS party under threat as Bolivia moves towards new elections (without Evo).” *NACLA Rebel Currents*, 10 de enero. <https://nacla.org/blog/2020/01/10/mas-party-under-threat-bolivia-new-elections-without-evo>.

Anria, Santiago

2013 “Social movements, party organization, and populism: insights from the Bolivian MAS.” *Latin American Politics and Society* 55 (3): 19–46.

2016 “Democratizing democracy? Civil society and party organization in Bolivia.” *Comparative Politics* 48: 459–478.

Anria, Santiago and Jennifer Cyr

2017 “Inside revolutionary parties: coalition-building and maintenance in reformist Bolivia.” *Comparative Political Studies* 50: 1255–1287.

Arteaga, Walter

2015 “Building citizenship in the context of the debate on the post-2015 agenda in Bolivia.” *Community Development Journal* 50: 571–588.

Brown, John

2022 *Deepening Democracy in Post-Neoliberal Bolivia and Venezuela: Advances and Setbacks*. London, New York NY: Routledge.

2018 “Escaping the confines of market democracy: lessons from Venezuela.” *Socialism and Democracy* 32 (2): 14–31.

Cannon, Barry and John Brown

2017 “Venezuela 2016: el año de vivir peligrosamente.” *Revista de Ciencia Política* (Santiago) 37: 613–634.

Ciccariello-Maher, George

2013 “Constituent moments, constitutional processes: social movements and the new Latin American left.” *Latin American Perspectives* 40 (3): 126–145.

Culpepper, Pepper

2015 “Structural power and political science in the post-crisis era.” *Business and Politics* 17: 391–409.

ElAltoDigital

2020 “La Fejuve de El Alto avanza rumbo a la unificación.” 21 de octubre.

<https://www.elaltodigital.com/politica/la-fejuve-de-el-alto-avanza-rumbo-a-la-unificacion/>.

Ellner, Steve

2013 “Latin America’s radical left in power: complexities and challenges in the twenty-first century.” *Latin American Perspectives* 40 (3): 5–25.

Espósito, Carla and Walter Arteaga

2006 *Movimientos sociales urbano-populares en Bolivia: Una lucha contra la exclusión social, económica y política*. La Paz: UNITAS.

ExitoNoticias

2020 “Se rompe el pacto de unidad entre Basilio Villasante y Fernando Condori.”

ExitoNoticias, 11 de diciembre. <https://exitonoticias.com.bo/index.php/2020/12/11/se-rompe-el-pacto-de-unidad-entre-basilio-villasante-y-fernando-condori-se-toman-instalaciones-de-la-fejuve-de-el-alto/>.

Fontana, Lorenza Belinda

2013 “On the perils and potentialities of revolution: conflict and collective action in contemporary Bolivia.” *Latin American Perspectives* 40 (3): 26–42.

Fuentes, Federico

2014 “‘Bad left government’ versus ‘good left social movements’?: Creative tensions within Bolivia’s process of change,” pp. 103–125 in Steve Ellner (ed.), *Latin America’s Radical Left: Challenges and Complexities of Political Power in the Twenty-first Century*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

García Linera, Álvaro

2011 *Las tensiones creativas de la Revolución: La quinta fase del proceso de cambio*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

Holloway, John

2002 *Change the World without Taking Power*. London: Pluto Press.

International Human Rights Clinic and University Network for Human Rights

2020 “They shot us like animals: Black November and Bolivia’s interim government.”

<https://www.humanrightsnetwork.org/bolivia>.

Jessop, Bob

1990 *State Theory: Putting the Capitalist State in its Place*. Cambridge: Polity.

2008 *State Power: A Strategic-Relational Approach*. Cambridge: Polity.

2016 *The State: Past, Present, Future*. Cambridge: Polity.

Katz, Claudio

2012 “Socialist strategies in Latin America,” pp. 31–48 in Jeffery Webber and Barry Carr (eds.), *The New Latin American Left: Cracks in the Empire*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Kaup, Brent

2010 “A neoliberal nationalization? The constraints on natural-gas-led development in Bolivia.” *Latin American Perspectives* 37 (3): 123–138.

2013 “Transnational class formation and spatialities of power: the case of elite competition in Bolivia.” *Global Networks* 13 (1): 101–119.

Kohl, Ben and Linda Farthing

2012 “Material constraints to popular imaginaries: the extractive economy and resource nationalism in Bolivia.” *Political Geography* 31: 225–235.

Paz, María and Juan Ramírez-Cendrero

2021 “Extractivism and resource nationalism in Bolivia: foreign direct investment policy and development under Evo Morales,” in Steve Ellner (ed.), *Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism, and Resistance in Broad Perspective*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Postero, Nancy

2010 “The struggle to create a radical democracy in Bolivia.” *Latin American Research Review* 45 (4): 59–78.

Poulantzas, Nicos

1978 *State, Power, Socialism*. London: NLB.

Robinson, William

2012 “Global capitalism theory and the emergence of transnational elites.” *Critical Sociology* 38: 349–363.

Silva, Eduardo

2009 *Challenging Neoliberalism in Latin America*. New York: Cambridge University Press.

2017 “Reorganizing popular sector incorporation: propositions from Bolivia, Ecuador, and Venezuela.” *Politics and Society* 45 (1): 91–122.

Solón, Pablo

2023 “What’s next for Bolivia after Camacho’s arrest?” *NACLA*, 11 de enero.

<https://nacla.org/whats-next-bolivia-after-camachos-arrest> .

Stefanoni, Pablo

2023 “Bolivia: ajustes de cuentas con 2019; batallas políticas hacia 2025.” *Análisis Carolina*, 13 de enero. <https://www.fundacioncarolina.es/bolivia-ajustes-de-cuentas-con-2019-batallas-politicas-hacia-2025/> .

Veltmeyer, Henry

2014 “Bolivia: between voluntarist developmentalism and pragmatic extractivism,” pp. 80–113 in James Petras and Henry Veltmeyer (eds.), *The New Extractivism: A Post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-first Century?* London and New York: Zed Books.

Webber, Jeffery

2017 *The Last Day of Oppression and the First Day of the Same: The Politics and Economics of the New Latin American Left*. Chicago: Haymarket Books.

2023 “Renovation in Bolivia?” *New Left Review Sidecar*, 6 de febrero. <https://newleftreview.org/sidecar/posts/renovation-in-bolivia> .

Williams, Jack and John Curiel

2019 “Analysis of the 2019 Bolivia election.” *CEPR*, 27 de febrero. <https://cepr.net/report/analysis-of-the-2019-bolivia-election/>.

Wolff, Jonas

2016 “Business power and the politics of postneoliberalism: relations between governments and economic elites in Bolivia and Ecuador.” *Latin American Politics and Society* 58 (2): 124–147.

Zibechi, Raul

2010 *Dispersing Power: Social Movements and Anti-State Forces*. Oakland, CA: AK Press.
2012 *Territories in Resistance: A Cartography of Latin American Social Movements*. Oakland, CA: AK Press.

